

FOSDEH

Análisis de los primeros cien días

La versión del país que nunca le dirán sus asesores al Presidente Zelaya

Al cumplirse los primeros cien días del nuevo gobierno que encabeza Manuel Zelaya Rosales, lo deseable sería que en este momento la sociedad hondureña se concentrara en discutir alrededor de un primer informe de avances en política pública y sobre la visión estratégica del mandatario, pero en la práctica la sensación generalizada es que la prioridad oficial del Presidente ha sido apagar conflictos, que no logra desprenderse de los compromisos dejados por Maduro y que en el balance de su actuación pesa más la improvisación y lo errático, que la claridad de objetivos.

La valoración de lo ocurrido hasta ahora es diversa. Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), calificó las acciones del gobernante como de una "lógica caótica", mientras que Berta Oliva, coordinadora del COFADEH sostiene que en esta primera etapa "Mel Zelaya repartió tanto el poder, que se quedó sin él". Entre los allegados al gobernante los juicios de valor dependen de si hablan en público o en privado o si quien los expresa forma parte del primer círculo de poder, del segundo, del tercero o del cuarto.

Para nuestra organización, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), lo que tenemos a la vista es a un Presidente que se queja de que la sociedad no comprende y acompaña sus intenciones reformadoras, pero que ha sido incapaz de mostrar si efectivamente las tiene. La improvisación mostrada en su discurso de toma de posesión sigue vigente en el desempeño de sus funciones.

En ese sentido, esta valoración tiene el propósito de mostrar la preocupación de un sector de la sociedad hondureña sobre la actuación gubernamental en los primeros 100 días, no por criticar por criticar, sino para tratar de incidir a favor de que el país mejore.

En el FOSDEH estamos convencidos que el fracaso de Honduras únicamente beneficiará a quienes habiéndose lucrado de sus riquezas, ahora quieren terminar de amasar sus fortunas con los despojos.

Ahora bien, ¿por qué este análisis a los cien días de mandato? Más allá de que los plazos atraen a las ciencias políticas y que suelen ser arbitrarios (¿por qué cien y no 120?, este es un período suficiente como para mostrar una tendencia, igual que los primeros resultados de las urnas electorales perfilan el veredicto final de los electores. Sin embargo, nuestro deseo es que el panorama cambie, que las tendencias se transformen y que el gobierno no desperdicie esta responsabilidad histórica que tiene entre manos.

La herencia de la Administración Maduro

Por más que se quiera soslayar, la alusión a la herencia de Ricardo Maduro es inevitable para evitar ser injustos con la administración Zelaya.

El gobierno liberal no partió de cero el pasado 27 de enero, sino que lo hizo teniendo como base lo actuado por su antecesor. Un buen saldo facilita la gestión; uno malo la dificulta.

Pese a la insistencia del ex presidente Maduro y de su equipo de gobierno de que hicieron bien las tareas y que dejaban una “mesa servida”, lo cierto es que la impresión entre la mayoría de la población es otra. Maduro dejó muchas “minas” enterradas y una altísima corrupción.

Sólo para el presente año, el anterior gobierno dejó el compromiso público de pagar unos 2,600 millones de lempiras en concepto de deuda interna, teniendo como beneficiarios principales a los bancos privados, pero la deuda acumulada es mucho mayor si se toma en cuenta que en los pasados cuatro años el Estado abusó en poner a la venta bonos, ofrecidos con una tasa de interés elevada, y que fueron apetecidos por los banqueros, seguros de hacer un negocio redondo sin riesgos, pero que encareció y dificultó el acceso a crédito al pequeño y/o mediano productor, política que le da continuidad el actual gobierno..

Bajo esas circunstancias, el sabor que la ciudadanía tiene en la boca es de frustración y engaño porque la gestión de Maduro fue de empresarios para favorecer a empresarios...y si eran del gran capital salvadoreño, entonces mucho mejor. El “canal seco”, Puerto Cortés, bancos, aseguradoras, sector turismo,...todo a disposición de los inversionistas.

Además de haber llenado todos los requisitos de “país pobre, severamente endeudado” que permitió acceder a la condonación parcial de la deuda externa, el equipo Maduro sostiene que su logro principal fue alcanzar un nivel macroeconómico estable.

Según los portavoces de Maduro, el panorama que dejó era esperanzador: *“un ascendente y sostenido crecimiento económico, una menor inflación, una estabilidad cambiaria, un sistema financiero sólido, finanzas públicas sanas, una deuda exterior disminuyendo, y un acuerdo vigente con el FMI”*.

La ex Presidenta del Banco Central, María Elena Mondragón, incluso advirtió a las nuevas autoridades que ante ese panorama *“lo que puede hacerse son revisiones y afinamientos a las políticas adoptadas hasta el momento”*. Nada más.

Al margen de dudas razonables en cuanto a la validez de las cifras divulgadas por el Banco Central, el problema es que esa “estabilidad macroeconómica” nunca se reflejó en la vida real y cotidiana del hondureño y la hondureña común y corriente, al contrario, la situación empeoró para miles de familias. Estadísticas oficiales admiten que la pobreza en mayo del 2001 afectaba al 64.5% de la población y en mayo del 2005 al 65.8%.

En otra esfera de acción, pese a ser considerado un gobierno “tecnocrático”, Maduro no aportó cambios sustanciales a la estructura pesada, burocrática, ineficiente y propensa a la corrupción que caracteriza al Estado. Lo dejó tal como la recibió, o en peores condiciones.

En su efímero paso por la gerencia de la ENEE, Juan Bendeck, afirmó que *“unos 1500, de los 3000 millones de lempiras en pérdidas anuales de la ENEE son por actos de corrupción”*.

La burocracia que encontró Zelaya incluyó 16 Secretarías de Estado (ministerios), 45 instituciones descentralizadas y autónomas, 71 direcciones generales, cinco

comisiones nacionales, 188 Unidades ejecutoras y 284 programas y proyectos, con un presupuesto global de gastos superior a los 75 mil millones de lempiras.

De acuerdo con una evaluación hecha por las nuevas autoridades a los 284 programas y proyectos, el 42% de los mismos no están coordinados por la institución rectora correspondiente, 63% trabajan sin metas e indicadores, 68% no están alineadas claramente con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), 81% tienen un desfase operativo de 12 meses y casi 100% tienen costos operativos superiores al 30%. **¿Eficiencia?, ¿Eficacia?, pero ¿Cuáles son las medidas concretas para lograr esa coordinación, para alcanzar las metas, para mejorar la capacidad de ejecución, para lograr transparencia en la utilización de estos recursos?**

Madurolandia

La **Foxilandia** es un término del lenguaje político popular mexicano que hace referencia "al país de fantasía", descrito por el Presidente Vicente Fox cuando menciona, según sus críticos, los logros de su gobierno (2000 - 2006). El término también puede aplicarse a las declaraciones de Maduro y sus principales funcionarios. En "**Madurolandia**" (según la versión oficial):

- ? Triunfó la política de "cero tolerancia" y el ex ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, fue un "héroe".
- ? Las "maras" fueron aniquiladas o reducidas a su mínima expresión
- ? Bajó la tasa de pobreza.
- ? La economía que más creció en Centroamérica fue la hondureña.
- ? La firma de la Carta de Intenciones con el FMI garantiza el éxito de la economía hondureña.
- ? El desempleo disminuyó.
- ? Existió libertad de prensa.
- ? Los salarios son mejores que antes y el Lempira tiene más poder adquisitivo.
- ? Se fortaleció la soberanía del país.
- ? La lucha contra la corrupción se incrementó.
- ? Se le está ganando la guerra al narcotráfico.
- ? La deuda externa se redujo a dos mil millones de dólares y tenemos 4 mil millones de lempiras para ejecutarlos en los proyectos que priorice la población
- ? Logramos tener las reservas internacionales con cifras record, las más altas en la historia de Honduras" (Nunca dijo que fue por el aumento de las remesas que envían los migrantes)
- ? EL CAFTA es la mejor negociación económica, independientemente que desaparezca la micro y pequeña empresa y que los campesinos (as) decidan irse mejor de "mojados" a los estados Unidos

Contrario al espejismo, diversos análisis y datos oficiales, así como las investigaciones del FOSDEH confirmaron que en el mandato de Maduro el sistema produjo más pobreza, más exclusión, más marginación, más injusticia, más corrupción y más migración forzada. En términos de inequidad, hoy se está peor que hace cuatro años. Oficialmente, el ingreso per cápita de los hogares bajó de 1660 lempiras en el 2001 a 1597 lempiras en el 2005 y el desempleo abierto pasó de 4.2% a 4.7% de la población económicamente activa. El subempleo se generalizó vía el crecimiento del sector informal.

En realidad, fueron los pobres, las remesas de los pobres, los que mantuvieron el equilibrio macroeconómico durante el gobierno de Maduro, como lo han hecho antes, como lo hacen ahora.

Vale preguntarse: ¿quiénes pagaron el costo del desempleo, de la falta de trabajo con salario digno, de la caída de la inversión pública...?

No es extraño que mientras más hablaron los ex ministros de Maduro de la ERP, en el país crecían los extremos de la desigualdad. Los grandes capitales salieron satisfechos, pero los pobres no. La verdadera disminución del déficit fiscal ocurrió en el gasto social, no en los privilegios. Sólo los dueños de las grandes plantas térmicas de generación de energía se embolsaron 6,000 millones de lempiras en el 2005, favorecidos por contratos en los cuales se obliga al Estado a pagarles incluso cuando no están produciendo energía.

También los empresarios de la maquila afianzaron su paraíso fiscal bajo el ropaje del CAFTA, y en contraste los (as) pobres soportaron un sacrificio fiscal por el orden de los 2,500 millones anuales, aspectos que continúan y en perspectiva vemos que se pretenden acentuar.

Promesas en lugar de propuestas

Propuestas, verdaderas propuestas para enderezar el camino que dejó Maduro no hay desde Casa Presidencial. Tampoco hay motivos para que la sociedad se declare sorprendida de la ausencia.

Es fácil constatar que la pasada campaña electoral no fue de contenidos e ideas para afrontar los principales desafíos que afronta Honduras al comenzar el nuevo milenio. Lo que prevaleció fueron insultos, ataques de unos contra otros y abundante demagogia.

Ninguno de los candidatos de los partidos mayoritarios ofreció respuestas efectivas a la crisis crónica que vive el país. Ni siquiera hubo un debate público, como en otras elecciones generales, donde los aspirantes presidenciales expusieran sus propuestas centrales.

Incluso, en plena campaña, los partidos políticos llegaron a despreciar la oportunidad que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) les ofreció para firmar el "Gran Acuerdo por Honduras". El 5 de septiembre de 2005 rechazaron comprometerse con afirmaciones como la siguiente:

"Honduras demanda un esfuerzo unitario, en torno a temas estratégicos determinantes del desarrollo total de la Nación, a fin de que los beneficios del esfuerzo colectivo abarquen a todos los sectores, sin exclusión alguna. La historia nos enseña que el crecimiento económico es esencial para el desarrollo, pero igual evidencia que, sin equidad ni transparencia, se torna insostenible. Esto que nos muestra la historia, el presente nos lo está demandando para hoy".

En el texto sobresalía otro compromiso: *"los fondos de la Condonación de la deuda externa deben ser manejados de manera ejemplar, honrando a los más pobres y disminuyendo las desigualdades que marginan a la mayoría y resquebrajan la solidaridad social que requiere el desarrollo sostenible".*

A los políticos hondureños nunca les ha importado mucho firmar un acuerdo y luego incumplirlo, pero lo ocurrido en septiembre anticipaba que ganaran los liberales o

los nacionalistas lo que se avecinaba era un **gobierno de partido, sin sentido de integración nacional.**

El Plan de Gobierno, publicado pocos días antes de las elecciones, no fue un documento prioritario o estratégico del entonces candidato liberal, tampoco lo era para los nacionalistas su propia versión. Los extremos de la contienda eran “pena de muerte” o la vaga propuesta de “poder ciudadano”.

Como resultado, el 49% de abstencionismo y/o ausentismo de las pasadas elecciones dejó sobre la mesa un mensaje claro de inconformidad y frustración de amplios sectores por el manejo económico y social del país.

Los votos nulos y en blanco hablaron también de la necesidad de cambiar las formas tradicionales de hacer política, pero ¿entendieron los políticos ese mensaje? o ¿comprendió Mel Zelaya que su punto de partida como gobernante era distinto a los de sus antecesores?

En todo caso, recuperados de la sorpresa de su triunfo electoral (inesperado para muchos liberales), lo que ocurrió fue que las principales promesas electorales las transformaron en su Plan de gobierno 2006-2010, sin ponerse a pensar en su viabilidad e impacto.

Entre esas promesas destacan (con su costo incluido, en lempiras):

1. Matrícula gratis (400 millones)
2. Fondo de reforestación (más de mil millones)
3. 2.000 nuevos policías (200 millones)
4. Reducción o congelamiento de costos de combustibles (entre 400 y 700 millones).
5. Aumento salarial a empleados públicos (370 millones)
6. Reforma (transformación) del Estado (pendiente, con un costo estimado en 1,200 millones de lempiras).
6. Aprobación de las leyes de Participación Ciudadana y Transparencia.

La ejecución de varias de esas promesas despertó más dudas que alegrías. Una de ellas, por ejemplo, fue la decisión de Zelaya de trasladar unos mil efectivos de las **Fuerzas Armadas** a la policía. El riesgo de confundir las competencias entre soldados y policías ya había sido advertida desde hace mucho tiempo, sin embargo, no se tomó en cuenta.

También crea incertidumbre la decisión del Gobierno de entregar cheques cuantiosos de lempiras a los directores de colegio para que los manejen a discreción y compensen que los padres no pagaron matrículas. ¿Es correcta una decisión de ese tipo o debió haberse suplido con materiales las necesidades de inversión de los centros educativos?

El tema de los combustibles no es menos confuso. ¿La decisión de pagar un “seguro” multimillonario a la banca privada internacional que garantice la estabilidad de los precios durante un período determinado (nueve meses) es una buena inversión pública o estamos a las puertas de una costosa tomadura de pelo, con negociantes más listos que nosotros?

A las promesas anteriores se citan otras de indudable importancia y que requieren un cambio de estrategia para hacerlas efectivas:

PRINCIPALES PROMESAS Y METAS DEL GOBIERNO LIBERAL	Situación actual 2005	Meta 2010
Combatir la pobreza extrema. Focalizar las acciones en la erradicación del hambre de los 450,000 niños y niñas que hoy se encuentran en grave estado de desnutrición.	450,000	Hambre cero
Reducir la pobreza en 15 puntos para cumplir la meta del 2015, incluyendo el rezago de años anteriores.		1 millón menos de pobres
Creación de empleos (crecimiento pro-pobre), MIPYMES, Cajas Rurales, y otros.		400,000
Construcción y mejoramiento masivo de viviendas		200,000
Reducir la mortalidad materna en 18 puntos	108	90
Reducir la mortalidad infantil en 7 puntos	34	27
Calidad en la educación primaria (aumentar cobertura en preescolar y media)	90%	100%
Áreas naturales efectivamente sembradas	0	39
10 millones de árboles sembrados		10 millones
Índice de equidad de género mejorado en 5%	0.65%	0.7%

¿Son malas esas promesas electorales o es malo que el Presidente las trate de cumplir?, obviamente que no, de hecho es un avance que un gobernante en ejercicio se acuerde de ellas. Sin embargo, la aceptación tampoco puede ser rotunda, incondicional, puesto que el Presidente no puede manejar alegremente las cuentas del presupuesto, cargando partidas sin precisar respaldos y ejecutándolas sin participación ciudadana.

Salvo en su oferta de reducir el costo de los combustibles, donde se amparó en las recomendaciones de la Comisión de los Notables y en el trabajo de la Coalición Patriótica, en el resto de las promesas por cumplir la iniciativa ha sido exclusivamente Presidencial, nada más, sin tomar en cuenta las redes sociales existentes.

Ni siquiera la denominada Ley de Participación Ciudadana involucró a la ciudadanía. El proyecto de ley se redactó en una oficina y se aprobó en una sesión improvisada de los diputados en medio de las negociaciones por el control de la mesa directiva del Congreso Nacional. La ausencia de la sociedad misma explica el fracaso anunciado de la ley y la forma en que se mutiló su sentido original.

Para algunos críticos el manejo que hace Mel Zelaya de la Presidencia es “populista”, pero, de ser cierto, sería un populismo a la hondureña, es decir, con el mínimo de ingredientes y de creatividad puesto que el país carece de petróleo, gas u otro recurso natural estratégico que lo surta de dólares. La excepción, quizás, sean las remesas que envían los emigrantes, pero que no se generan dentro de Honduras. En el 2005 el volumen de remesas se estimó entre 1750 y 2000 millones de dólares, y para el 2006 se esperan 2500 millones de dólares.

En este apartado, la **política exterior de Zelaya no se muestra diferente** a la de Maduro y de Flores Facussé. La prioridad era obtener una nueva prórroga al TPS, lo que finalmente se logró por un año adicional (julio, 2007). Luego de eso: nada. Los vejámenes que sufren miles y miles de hondureños y hondureñas en su travesía al norte siguen impunes, y también es impune el robo “legalizado” que las agencias financieras le hacen a remesas familiares, cobrándoles más por el servicio de intermediación que las tarifas vigentes en El Salvador y otras naciones.

Todos los deportados de EEUU que llegan por vía aérea ingresan a Honduras esposados de pies y manos, como criminales de alto riesgo, y el tratamiento que suele dar la policía mexicana a los 78,000 hondureños que deportó en el 2005 suele ser similar

o peor. En ninguna conversación o negociación con el presidente mexicano Vicente Fox, antes o ahora, los gobernantes hondureños se han mostrado enérgicos al reclamar respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas. Ni siquiera han planteado el tema evidenciando que para el Estado los emigrantes valen mientras generan dólares, de lo contrario son menos que cero.

¿El estilo del Presidente?

Mel Zelaya llegó al poder con un alto déficit de confianza de la población respecto a los políticos y a la institucionalidad pública. Con apenas 23% de los votos hábiles, recibió el mandato de promover cambios estructurales y el rechazo a la continuidad de un modelo económico y social que promueve mayores desigualdades, en lugar de reducirlas.

En las elecciones los liberales no recibieron un voto de confianza, sino que el electorado los hizo depositarios de su rechazo al gobierno saliente y al autoritarismo de Pepe Lobo.

La población les dijo que los candidatos no tenían que fijarse solamente en sí mismos y que si llegaban a gobernar no era para servirse del poder, sino para que usaran el poder para servir.

Las prioridades, entonces, tenían que surgir de las necesidades nacionales y de las grandes mayorías, no de los apetitos insaciables de riqueza de los oportunistas y corruptos o de los empresarios voraces.

Sin embargo, el país en estos cien días se caracterizó por ser un escenario de confrontación entre las demandas de los diferentes **sectores y no de las mayorías y las demandas económicas de las elites de poder, con un Presidente que da bandazos entre ellos. Un día sale una orden de su gobierno, y otro el desmentido.**

Resulta interesante señalar que el Gobierno liberal no sólo está rodeado de conflictos ya existentes, sino que muestra una gran capacidad para generar nuevos conflictos, incluso dentro de su propio gabinete.

Gobernabilidad e ingobernabilidad

De acuerdo con análisis del Centro de Documentación de Honduras:

- En el primer trimestre se registraron al menos 52 conflictos sociales, de baja, media y alta intensidad.
- La mayoría de los conflictos fueron de carácter económicos, ecológicos, agrarios y laborales.
- Las zonas más conflictivas fueron la central (Tegucigalpa) y la norte (San Pedro Sula).
- La tendencia es que los conflictos aumenten, en lugar de reducir.
- En el país hay una acumulación de conflictividad social, con un potencial enfrentamiento a corto plazo entre el gobierno y el gremio magisterial.

¿Cuáles han sido las respuestas del Gobierno a los conflictos externos? En general, la estrategia ha sido desactivarlos mediante negociaciones directas, incluyendo la aprobación de subsidios multimillonarios (taxistas), retención/ congelamiento de precios

(combustibles/energía eléctrica) o reconociendo conquistas laborales controversiales (aumento salarial de los empleados públicos y aumento al salario mínimo).

Hasta ahora, el mayor peso de las negociaciones ha recaído en el propio Mel Zelaya y un grupo reducido de sus asesores más próximos. Su objetivo ha sido claro: evitar al máximo huelgas o protestas masivas e indefinidas que deterioren la estabilidad institucional. Hasta ahora tiene éxito, pero ¿lo mantendrá?

En ese contexto, el estilo personal de Mel Zelaya de involucrarse directamente refleja su intento de encabezar un gobierno Presidencialista, pese a no controlar el Congreso Nacional y administrar una nación con débil respaldo popular.

Curiosamente, buena parte de la disputa por el control del Congreso Nacional no tiene como escenario la cámara legislativa, sino el patio del Partido Liberal.

Como lo señalan algunos analistas, **en su intento por unificar el Partido Liberal bajo su mandato, Mel Zelaya terminó dividiendo su propio gobierno al repartir los cargos principales entre corrientes y dirigentes.**

Así, el gabinete da la impresión de ser un archipiélago de poder en el cual el único puente que los une está bajo control del propio mandatario. La manipulación en la escogencia de personal fue tal que aún dentro de los propios ministerios hubo nombramientos contrapuestos, lo que se reflejó en tempranas disputas o desautorizaciones entre ministros y vice ministros o ministros y altos cargos.

De hecho, muchos de los nombramientos se hicieron sin tomar en cuenta si había correspondencia entre la capacidad profesional del escogido con el cargo que se le asignaba, de tal suerte que en el gabinete no están todos los que son y no son todos los que están.

Lo que parece perfilarse es que esa fragmentación no fue improvisada, sino planificada. La consigna es vieja: “divide y reinarás”, tanto así que incluso en la relación entre el Presidente y su Vicepresidente parece abierto un foso en estos primeros meses. El punto neurálgico es que los “melistas” son minoría y corren el riesgo de convertirse en una nueva versión del Movimiento “Arriba Honduras”, que surgió y desapareció con Maduro.

Esa debilidad se manifiesta en la lucha subterránea por el control del Partido Liberal que tiene varios frentes. En ellos los “caudillos” vuelven a jugar un papel protagónico, disputando desde las sombras el poder y el tráfico de influencias.

En ese escenario se explica, al menos en parte, la presión de los activistas liberales para obtener empleos públicos y los roces que tiene Mel Zelaya con poderes fácticos influyentes, varios de ellos mediáticos (político-empresariales).

Quizás esa circunstancia permite explicar el zigzagueante paso del gobierno liberal que un día se enfrenta a las grandes transnacionales del petróleo, a empresas distribuidoras nacionales ligadas a empresarios inescrupulosas y a la propia embajada de EEUU, y en otros negocios beneficia a empresarios de ese rubro con concesiones privilegiadas.

Una mañana el Presidente dice enfrentarse a los intereses de los magnates y en otra se monta en el avión de uno de ellos para sus viajes de Estado.

Ese ir y venir también se percibe en varias de las decisiones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, al mismo tiempo que Zelaya emitió un acuerdo para reducir en 30% la planilla salarial del Gobierno, firmó miles de recomendaciones para emplear en el Estado a activistas liberales. **¿En qué estamos?**

En perspectiva

Los cien días iniciales han quedado atrás. El reto es cumplir el resto de los cuatro años de mandato. La tarea es compleja porque hay muchos factores de riesgo, externos e internos, entre ellos:

- **Un eventual fracaso de la política de contención de precios en el mercado de los combustibles** y que inversiones tan altas como la compra del “seguro energético” resulten una pérdida cuantiosa. A principios de diciembre de 2005 el precio del crudo alcanzó US\$ 59.33 el barril, y en la actualidad rondan los US\$ 75.00. ¿Cómo reaccionará la población si se desata una inflación galopante?
- **Que no se controle el déficit fiscal** y que se dispare el endeudamiento interno a promedios graves, presionados por la disminución de los ingresos fiscales y la acumulación de compromisos por cumplir. ¿Cómo quedará la Carta de Intenciones y cuál será la actitud del FMI?
- **Un manejo equivocado de las negociaciones pendientes con los maestros y médicos.** La presión de la empresa privada, en línea con los organismos de financiamiento internacional, es dejar sin efecto los “regímenes especiales” (estatutos), pero ¿cuál será la respuesta de los gremios?.
- **El fortalecimiento y expansión del crimen organizado y la inseguridad ciudadana,** con un debilitamiento mayor de la cohesión social interna. *“Honduras compite con Colombia en violencia”*, afirmó Charles Ford, embajador de EEUU.
- **Una alianza entre sectores políticos de los grandes partidos** que deje al Presidente Zelaya con un poder nominal, no real.
- **El estallido de graves escándalos de corrupción** en el propio gabinete de gobierno. Las primeras señales de alerta ya surgieron de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y las Secretarías de Salud y de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, así como de la relación oficial actual con los periodistas y medios de prensa.
- **Una errada o débil defensa de los intereses nacionales** en el marco de la integración centroamericana y la globalización. La ratificación acelerada del Tratado de Libre Comercio con EEUU (TLC) y las reformas legales internas para alinearlos con el CAFTA o la negociación bilateral con El Salvador para la construcción de la Represa El Tigre, están entre esos temas álgidos. La Coalición Hondureña de Acción Ciudadana (CHAAC) advirtió de las consecuencias y responsabilidades que tendrá el CAFTA en el agro hondureño y en otros sectores sin posibilidades de competir y de sobrevivir en la plena aplicación del CAFTA.
- **El impacto de fenómenos naturales devastadores,** desde inundaciones hasta sequías, capaces de borrar cuantiosas inversiones públicas y estructura productiva ante la ausencia de una estrategia y financiamiento para el desarrollo de programas que reduzcan la vulnerabilidad de las áreas propensas a desastres

Ante esos y otros riesgos reales, ¿ha mostrado todo lo que puede dar el Gobierno del Presidente Zelaya en estos cien días iniciales?

El FOSDEH, al igual que otras organizaciones sociales, estima que no, y que ante los factores de riesgo (prácticamente amenazas) no se muestra vocación, organización y capacidad nacional para prevenirlos y superarlos. Para muestra la presencia reiterada de incendios forestales y el previsible efecto de las lluvias en las zonas más afectadas.

Del Gobierno se espera que mantenga y redistribuya el peso de la disciplina fiscal; que mejore la calidad del clima de las inversiones nacionales y no sólo del capital extranjero; que logre consensos políticos, económicos y sociales internos para una mejor negociación con el FMI y los organismos internacionales de financiamiento; que preserve la estabilidad social sin acudir a la represión, al divisionismo o la compra de dirigentes, y que retome el principio original de participación ciudadana.

Es absurdo que en la actualidad un mexicano y un peruano sean los principales asesores del Gobierno en el tema de la ERP y que haya sido contratado un consultor francés para desarrollar el concepto de “poder ciudadano”.

Lo que se reclama es que Manuel Zelaya cuente con una línea de acción coherente y conjunta con la ciudadanía, con los otros poderes del Estado y la comunidad internacional. Eso habla de un gran acuerdo nacional y de tomar en cuenta diversas iniciativas que le han presentado desde la sociedad civil y que hasta el momento no parecen interesarle.

Hay múltiples formas de gestión, autogestión y co-gestión en nuestro país, denominadas el sector social de la economía, como las cooperativas, cajas rurales, asociaciones campesinas, así como los comités de transparencia ciudadana y auditoría social, estrategias regionales de combate a la pobreza, y otras que esperan el respaldo público para desarrollarse.

El Estado debe abandonar esa actitud de propiciar condiciones para que el hondureño y la hondureña al no tener posibilidades reales de mejorar su condición de vida dentro del país, opten por abandonarlo y convertirse en emigrantes. Los hondureños no pueden ser considerados más valiosos fuera que dentro de su propia patria.

Honduras requiere un Plan de Reactivación Económica y Social de alto impacto que incluya nuevas reformas del Estado, y un respaldo verdadero a la ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, pero lo acontecido en la aprobación del Presupuesto de la República nos muestra la tendencia contraria. No hay que olvidar que Honduras tiene uno de los más altos niveles de desigualdad y pobreza de América Latina. La pobreza alcanza más de dos tercios de la población y sigue creciendo en lugar de disminuir, y la pobreza en sí es la peor forma de negar la participación ciudadana que existe.

El presupuesto no ha cambiado

Una buena prueba de que hay un cambio en la mentalidad política de los gobernantes tendría que haberse dado con el Presupuesto de Gastos e Ingresos de la República para el 2006, pero su contenido sigue las líneas pautadas por el gobierno de Maduro, pese a un simulacro de participación o consulta ciudadana que hubo en abril. El presupuesto global supera los 83 mil millones de lempiras, lo que ratifica que el problema mayor no es la falta de recursos, sino como administrarlos de manera eficiente y convertirlo en un instrumento de desarrollo, no de enriquecimiento ilícito o de politización de la gestión pública. Hay en el nuevo Presupuesto partidas globales y otros gastos generales que debieran aclararse y reorientarse a favor de la ERP. Dentro de sus prioridades, el Fondo para la Reducción de la Pobreza que de acuerdo a compromisos del Presidente Zelaya con el Consejo Consultivo de la ERP debió volverse real, y no virtual; alimentar con más recursos el Fondo, no extraer 700 millones de los 887 millones que estaban presupuestado y que ya eran insuficientes, evitar que los recursos de alivio/condonación de deuda externa sirvieran para financiar compromisos de campaña y de los primeros 100 días, volviendo volátiles estos recursos. Empezando por aclarar por qué si para el 2006 el alivio por la condonación de la deuda externa suma unos 2,700 millones de lempiras, sólo

se asignan, finalmente por decisión consensuada entre los partidos liberal y nacional a los proyectos generados y priorizados en un largo proceso participativo por el Consejo Consultivo de la ERP un 3.7% de esa suma o sea 100 millones de lempiras. ¿Entonces?

Si el Gobierno liberal plantea el desafío de considerar cambios al diseño original de la Estrategia, entonces tiene que considerar los siguientes factores asociados a su reducción: a) que no se puede impulsar sin la participación protagónica de la misma sociedad y de los pobres; b) que las políticas sociales del Estado deben armonizarse con los objetivos de la ERP y Metas del Milenio; c) que las políticas sociales no pueden reducir el número de pobres y las políticas macroeconómicas aumentarlo; d) que no se puede mantener la desigualdad y concentración de los ingresos en la proporción que tienen ahora, y e) que esas políticas sociales requieren continuidad; una visión de Estado que va más allá de un partido político o de un Presidente.

Se trata, en suma, de que las autoridades liberales vuelvan a leer y pongan en práctica los pilares que definieron para su Gobierno:

1. Estabilidad macroeconómica como condición básica para un crecimiento económico generador de empleo (digno) y eficiente (real) en disminuir la pobreza.
2. Gobernanza a través de la modernización de la gerencia del Estado, el mejoramiento de su eficiencia y eficacia y una mejor coordinación con la cooperación internacional (focalización e impacto masivo).
3. Participación ciudadana, contraloría social y combate a la corrupción.
4. Protección del ambiente y gestión de riesgos. Desarrollo agroforestal sustentable; y,
5. Desarrollo humano y del capital social. Mejorar la calidad de la educación, salud, acceso a redes y seguridad ciudadana.

El tiempo histórico de Honduras no permite más ensayos y errores. La misma región centroamericana prueba que los cambios son exigidos y no pueden postergarse. En Costa Rica uno de los dos partidos tradicionales acaba de desmoronarse, víctima de la corrupción y el desprestigio. Son tañidos de campanas que no se escuchan lejos y retan la fortaleza del Presidente Zelaya y de quienes desean hacer un buen gobierno para que respiren profundo, perciban en el semblante y en las opiniones de la gente que no están satisfechas con lo que ven, **y visualicen cuál es el mejor rumbo para una administración que acaba de empezar, pero que ya está dando la impresión que lleva años porque ha sido absorbido por la inercia dejada del gobierno anterior en cuanto a la política económica, fiscal y monetaria generadora de pobreza y exclusión social, y la telaraña de una institucionalidad debilitada por la corrupción y la politización partidaria.**

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)

4 de mayo, 2006